

para las fincas rústicas, hasta un dos y medio por ciento respecto de las Salinas del Peñon Blanco, disposicion, que en concepto del solicitante importa la violacion de la fraccion 2ª artículo 21 y de los artículos 4, 22 y 27 de la Constitucion federal. Vistos los documentos que obran en los autos; el parecer fiscal y la sentencia del C. Juez de Distrito.

Considerando: que la fraccion 2ª del artículo 31 de la Carta federal, al imponer á todo mexicano la obligacion de contribuir para los gastos públicos, impone al Legislador la obligacion correlativa de la equidad y proporcionalidad en el impuesto, importando esta taxativa la consagracion de una garantía para el contribuyente, intimamente ligada con las garantías individuales que son en la Constitucion federal la salvaguardia del derecho de propiedad.

Que de la simple lectura del artículo de la ley contra la cual se solicita el amparo, resulta con evidencia demostrado, que siendo una misma la base del impuesto para negociaciones de idéntica especie y habiéndose aumentado arbitrariamente la cuota de una de ellas en mas del doble, se establece una desproporcion flagrante en perjuicio de una negociacion, con la cual y por forzosa consecuencia se falta tambien á la equidad.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*Simon*

*Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Octubre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por el C. Manuel Ayala, contra los actos del Juez 3º de lo criminal, que lo mandó reducir á prision, poniéndolo en seguida á disposicion del Gobierno del Distrito.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Manuel Ayala, quejándose: de que el Juzgado 3º de lo criminal, lo habia consignado á disposicion del Gobierno del Distrito para ser remitido á Puebla, suponiéndolo reo del delito de peculado, cometido en San Juan de los Llanos, cuando como Gefe político recaudaba la contribucion de exentos de la guardia nacional; que se le exhortaba indebidamente por el Juzgado 2º de instruccion de Puebla, tanto por no ser Juzgado competente, por tratarse de actas que tuvieron lugar en San Juan de los Llanos, como por que el móvil era ejercer venganzas en su persona, por haber atacado por la prensa los abusos cometidos por el Gobierno de Puebla, no conteniendo el exhorto dirigido al Juzgado 3º de lo criminal, las inserciones legales, ni fundado el procedimiento, con todo lo cual se violaba en su persona, la garantía que concede el artículo 16 de la Constitucion, y se faltaba á las prescripciones de la circular de 30 de Noviembre de 1872, concluyendo con pedir la suspension del acto reclamado.

Acordada esta de plano por el Juzgado, mandó que continuara la sustanciacion del

juicio con arreglo á la ley, informando el C. Juez 3º de lo criminal, con justificacion en el término de la ley. La falta del informe justificado de este funcionario, quien se excusaba de rendirlo, porque era simplemente ejecutor de un auto del Juzgado 2º de instruccion de Puebla, dió lugar á que el Juzgado que debía tener á la vista los exhortos por haberse pedido por el quejoso que se tuvieran como parte de su prueba, exitara al Tribunal Superior para que ordenara al expresado C. Juez 3º de lo criminal, cumpliera con lo mandado por el Juzgado, de conformidad con la ley de amparo, y á lo cual accedió el Tribunal, dirigiendo la exitativa correspondiente, que fué obsequiada con la remision de la copia certificada de los exhortos y diligencias que practicó dicho Juzgado.

Mientras tenian lugar las anteriores actuaciones, el quejoso presentó escrito al Juzgado 3º de lo criminal, manifestando: que llevando mas de tres dias de preso sin haberse dictado el auto de formal prision que previene el artículo 19 de la Constitucion, con lo cual se violaba la garantía que otorga dicho artículo, pedia se lo pusiera desde luego en libertad. El Juzgado proveyó que no habia lugar por falta de jurisdiccion, por no ser mas que mero ejecutor. La anterior negativa hizo que el mismo escrito lo presentara al Juzgado de Distrito, y recayó igual proveido aunque por diversos fundamentos, pues se dijo que no se accedía, porque eso importaba prejuzgar la resolucion principal.

Ademas de los exhortos recibidos del Juzgado 3º de lo criminal, el Juzgado 2º de instruccion de Puebla, pidió copia certificada de las principales constancias que obran en la causa del C. Ayala, y le fueron remitidas á petición del C. Gobernador de Puebla, para que se desvanecieran las ideas vertidas por el quejoso, de que se trataba de satisfacer una venganza cuando se obra obsequiando la justicia. Sin tomar en cuenta estas constancias que no deben va-

lorizarse para la resolucion del juicio, pues solo podrian estimarse como una vindicacion del C. Gobernador de Puebla, pasa el que suscribe á promover en lo principal.

Sobre las garantías reclamadas y circular citada de 30 de Noviembre de 1872, el quejoso ha hecho valer la Constitucion de Puebla en la parte que determina los requisitos que deben observarse para exigir la responsabilidad á los funcionarios del Estado y los que no se han llenado como puede verse en los exhortos. Segun estos, aparece: que la exitativa para la aprehension del C. Ayala, la libró el Juzgado 2º de instruccion de Puebla, suponiéndolo presunto reo del delito de peculado, y obrando como auxiliar del Juzgado de San Juan de los Llanos á quien tocaba el conocimiento; á primera vista se desprende, sin la preocupacion del quejoso, y sin admitir sus principios de que el simple lapso del tiempo extingue la responsabilidad, que hay incompetencia de autoridad, pues siendo la manera principal de surtir fuero jurisdiccional al lugar del delito, y reconociéndose por el Juzgado 2º de instruccion de Puebla que el conocimiento incumbe al de San Juan de los Llanos, llamándose su auxiliar se avoca el conocimiento de una causa, prorogándose una jurisdiccion que no procede, segun los principios rudimentales de la jurisprudencia criminal.

Pues bien, admitiendo su jurisdiccion, el exhorto se libró por ser el C. Ayala presunto reo de peculado, y para este caso no procedia la formal prision; y procediendo, no aparece el auto que debiera reducirlo á formal prision, pues esta tenia lugar, y entonces debió existir el auto y habia fundamento para su prision y remision á Puebla, ó no cabia, y entonces no habia lugar á su prision ni remision en calidad de preso, sino simplemente á ser juzgado en rebeldia.

Repito que no se infiere la irresponsabilidad del quejoso, ni de la irregularidad de los procedimientos, ni de que las cuentas se le exijan despues de un tiempo mas ó menos dilatado, ni de que esto coincida con

las elecciones del Estado de Puebla, pues de su conducta tendrá que responder en todo tiempo, y no será buena ó mala porque concurren ciertas circunstancias, sino por la apreciación intrínseca de su proceder; pero por ahora sí aparece la infracción de los artículos 16 y 19 de la Constitución en el sentido indicado.

En cuanto á la violación del artículo 19 de la Constitución, que ha sido reclamado por haber permanecido en prisión durante el juicio de amparo, ha sido una consecuencia forzosa de esta, é inevitable, y no pudo ser puesto en libertad cuando lo solicitó el quejoso, porque si lo hubiera acordado el Juzgado, habría prejuzgado la cuestión principal que no debía resolverse sino á su tiempo.

Por lo expuesto, puede el Juzgado declarar: que la Justicia federal ampara y protege al C. Manuel Ayala.

México, 2 de Setiembre de 1874.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno,* secretario.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México, Setiembre 18 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido por el C. Manuel Ayala, contra los actos del C. Juez 3º de lo criminal de esta Capital, por los cuales lo mandó reducir á prisión y verificada esta, lo consignó al C. Gobernador del Distrito para que lo remitiera á Puebla á disposición del C. Juez 2º de instrucción de la Sala de sentencia de la Capital de ese Estado, fundando la procedencia del recurso intentado, en que no viniendo los exhortos en forma, no han debido ser obsequiados por el Juez de lo criminal, el que al cumplimentarlos, ha violado en la persona del quejoso la garantía que reconoce la Constitución federal de la República en su artículo 16. Visto el auto de suspensión de 27 de Julio próximo pasado; lo pido por

el C. Promotor fiscal; las diligencias conducentes para obtener del referido Juez, las copias certificadas de los exhortos, por no haber rendido en su oportunidad el informe con justificación que previene el artículo 9 de la ley de 20 de Enero de 1869, y las cuales era necesario tener, como se tienen á la vista, para decidir el recurso. Resultando de ellas:

Primero: Que han sido librados los exhortos por el C. Manuel Carrillo, Juez 2º de instrucción de la sala de sentencia de la Capital del Estado, al Juez 3º de lo criminal en 7 de Junio, 5 de Julio, 6 de Diciembre de 1873 y Julio 21 de 1874, en auxilio de dicha sala del Tribunal de la Villa de libres, á quien se dice toca el conocimiento.

Segundo: Que el Juez requerente hace constar, que sigue una averiguación criminal contra Manuel Ayala por peculado, y que supuesta la resolución del Gobierno del Estado y las diligencias practicadas, es presunto reo del mencionado delito, por lo que para procederse contra él, libra exhorto á uno de los jueces de esta Capital para que lo aprehenda y remita á Puebla á su disposición.

Tercero: que las diligencias que se insertan en los exhortos para fundar el procedimiento y la culpa del procesado, son la opinión del Sr. Tendillo haciendo cargo á Ayala por la cantidad de mil trescientos pesos, fundando esa opinión en una comunicación fecha 21 de Abril de 1871 dirigida por este al Gobierno del Estado, en que dice que la contribución de que se trata debe producir trescientos veinte pesos mensuales. Otra comunicación de Ayala pidiendo un plazo al Gobernador para presentar los justificantes de la data, y el acuerdo que á esta recayó concediéndole el plazo de un mes improrogable. Que en vista de estos datos, el Juez 3º de lo criminal como Juez requerido, ha debido examinar la competencia del Juez requerente, y si en los exhortos se funda y motiva la causa legal del procedimiento (artículo 16 de la Constitución, Cur.

Supl., tít. 4º, part. 3ª y 18, tít. 1º part. 7ª.)

Considerando en cuanto á la competencia de jurisdiccion: que de autos consta, que la responsabilidad que se exige al C. Manuel Ayala, dimana de las atribuciones que como Jefe político le dió la ley del Estado de 5 de Agosto de 1870 en su artículo 1º; que con ese carácter goza de fuero constitucional para ser procesado por delitos y faltas oficiales cometidos en el desempeño de su encargo (artículo 137 de la Constitución del Estado) y, por lo mismo conforme al artículo 74 fracción 24 de esa Constitución y artículo 49, tít. 9 de la ley orgánica de tribunales de 21 de Mayo de 1871, el Gobernador del Estado y los individuos del consejo constituido en gran Jurado y previos los requisitos legales, han debido declarar si es ó no culpable.

Que aun puesto en duda el fuero constitucional, por la falta de datos ministrados por el Juez requerente, el Juez del fuero común para juzgar á Ayala y dictar el auto de prision, sería uno de los jueces de la Sala de sentencia del Tribunal de lo criminal del Distrito jurisdiccional de San Juan de los Llanos, artículos 25 y 27, fracción 2ª y 33 fracción 3ª de la ley orgánica del Estado citado, y no el Juez 2º de instruccion de la Sala de sentencia de la Capital del Estado, porque al hacerlo sin fundarse en la ley que lo autorice para proceder, confiesa que obra en comision, violándose los artículos 13 y 14 de la Carta fundamental.

Considerando en cuanto al hecho que *motiva* el procedimiento: que no existe la declaracion de culpabilidad de Ayala hecha por el jurado, ni comprobada ante el Juez requerente la existencia del fondo de mil trescientos pesos en la oficina que fué al cargo de aquel, ni que los haya recibido sin cargárselos en los libros como un ingreso perteneciente á fondos del erario del Estado, pues no aparece corte de caja ni liquidacion de donde pueda inferirse una sustraccion de cantidad preexistente de fondos del erario, que es lo que constituye el delito de

peculado. Dou. tomo 7º lib. 3º tít. V. § 18.

Considerando por último: lo expuesto por el referido Ayala en su ocurso de fojas 8 para hacer extensivo el presente recurso al artículo 19 de la Constitución, por creer que la detencion por mas de tres dias, importa una violacion en su persona de la garantía consignada en dicho artículo; que ese término debe considerarse que corre desde que el presunto reo está á disposicion de su Juez natural, y que en el presente caso esto no ha podido verificarse, por los efectos que produjo el auto de suspension de 27 de Julio próximo pasado, dictado á su pedimento y á su favor; que por lo mismo, el acto reclamado no lo ha sido de autoridad alguna, sino que ha nacido de la naturaleza del procedimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento de lo expuesto, de los artículos citados y de los 101 y 102 de la Constitución y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

Primero: Que no ha sido violada en la persona del C. Manuel Ayala, la garantía otorgada en el artículo 19 de la Constitución federal.

Segundo: Que ha sido violada la garantía que expresa la primera parte del artículo 16 de la misma Constitución, en la persona de Manuel Ayala, y que por lo mismo la Justicia de la Union lo ampara y protege contra los actos del C. Juez 3º de lo criminal, que obran en los autos de 15 de Diciembre de 1873 (fojas 30) y 30 de Julio próximo pasado (fojas 34 vuelta) por los cuales lo mandó reducir á prision y lo consignó al C. Gobernador del Distrito, para que lo remitiese á Puebla.

Publíquese en el Semanario Judicial y Diario Oficial; hágase saber y remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo proveyó y firmó el C. Juez 1º interino de Distrito, Lic. José María Landa. Doy fé.—*José M. Landa.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 2 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital por el C. Manuel Ayala, contra los actos del Juez 3º de lo criminal, que lo mandó reducir á prisión poniéndolo en seguida á disposicion del Gobierno del Distrito, para que á su vez lo remitiera á Puebla á disposicion del Juez 3º de instruccion de la Sala de sentencia de la Capital de ese Estado, que dirigió exhorto á dicho Juez de lo criminal para la aprehension y remision del mencionado Ayala, por estar acusado del delito de peculado, con lo que el promovente cree violadas respecto de su persona, las garantías que consigna el artículo 16 del Pacto federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que segun la Constitucion particular del Estado de Puebla, la autoridad judicial no tiene propiamente ingerencia en los juicios de los Jefes políticos acusados de peculado, mientras no haya tenido lugar el juicio administrativo, con los trámites que en aquella Constitucion se determinan.

Que está probado en los autos, que no se ha observado ninguna de dichas prevenciones respecto del promovente Ayala, que fué Gefe político de los Llanos de Apam y está acusado de manejo no justificado de los fondos públicos durante su administracion.

Que en consecuencia, la autoridad judicial comun, es por ahora estraña á los procedimientos del juicio que debería verificarse para averiguar la culpabilidad del mencionado Ayala, de lo que se deduce su incompetencia y la violacion del artículo 16 de la Constitucion federal.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la misma, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arceaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. Juan J. Díaz, contra el cobro que le hace el Administrador de rentas de Guaymas, de los derechos de introduccion de varios efectos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Juan J. Díaz pide amparo y proteccion, contra los procedimientos del C. Administrador de rentas de esta ciudad, por el cobro que se le hace de algunos efectos nacionales importados por la balandra "Artemisa," con cuyos procedimientos se le violan las garantías que le otorga la Constitucion general en sus artículos 4, 14 y 16. El que suscribe, cree bastante fundada su queja, supuesto á ser tan terminante la ley de 2 de Mayo de 1868, á la que se opone abiertamente la ley de clasificacion de rentas por la que se hace este cobro de 4 de Diciembre del año próximo pasado, prohibiendo aquella, que los Estados impongan mayores contribuciones á los efectos naciona-